

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	María Libia Holguín de Arrubla
DEMANDADOS	Colpensiones y María Ubaldina Mesa Bedoya
PROCEDENCIA	Juzgado Veintidós Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 022 2017 00299 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro.117 de 2021
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de sobreviviente muerte de pensionado. El cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente, separado de hecho, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, siempre que acredite convivencia con el causante por un lapso no inferior a cinco años en cualquier tiempo, sin que sea necesario probar que durante ese lapso se conservó entre estos un vínculo afectivo. Tesis vigente actualmente por desarrollo jurisprudencial
DECISIÓN	Revoca

Hoy, **treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la demandante **María Libia Holguín de Arrubla**, contra a la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario en contra de **Colpensiones**, al cual fue vinculada como litisconsorte necesaria por pasiva la señora **María Ubaldina Mesa Bedoya**. Código único nacional 05001 3105 **002 2017 00299** 01.

Auto: En atención a la documentación allegada a esta instancia se reconoce personería a la abogada **Hellen Andrea Grajales Rave**, en los términos y para los efectos allí indicados.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, procede a emitir sentencia, según proyecto estudiado, discutido y aprobado en sala virtual, acta **Nro.21** que se plasma a continuación:

Antecedentes

La señora María Libia Holguín, formuló demanda pretendiendo el reconocimiento y **pago de la sustitución pensional en el 50% por la muerte de su cónyuge**, Hernando Antonio Arrubla Montaña, **retroactiva al 8 de julio de 2016**, con las mesadas adicionales, **intereses moratorios artículo 141 Ley 100 de 1993 a partir del 8 de noviembre del mismo año**, indexación y costas.

En sustento de ello afirma que, contrajo matrimonio con el señor Hernando Antonio Arrubla Montaña el 26 de febrero de 1961; que durante la convivencia matrimonial procrearon 10 hijos, compartiendo techo, lecho y mesa hasta el año de 1981, fecha en que se separaron de hecho; que mediante Resolución No. 3207 de 1998 el otrora Instituto de Seguros Sociales le reconoció y pagó pensión de vejez en cuantía superior al salario mínimo legal mensual vigente a su cónyuge, quien **falleció el 20 de noviembre de 2003**, fecha para la cual su mesada equivalía a \$824.369.00; que **el 8 de julio de 2016 elevó reclamación administrativa** peticionando la sustitución pensional en razón del vínculo matrimonial vigente que mantuvo por 42 años y la convivencia ininterrumpida por alrededor de 20 años, solicitud que fue negada mediante la Resolución GNR 245323 del 19

de agosto de 2016, bajo los argumentos de que la sustitución pensional fue reconocida a la señora María Ubaldina Mesa Bedoya en calidad de compañera permanente del pensionado y que su derecho se encontraba prescrito por no haber comparecido dentro del mes siguiente al edicto emplazatorio fijado en razón a la reclamación de la señora Mesa; que el acto administrativo anterior fue confirmado por las Resoluciones GNR 356753 del 25 de noviembre de 2016 y VPB 492 del 5 de enero de 2017 con las que se resolvieron los recursos interpuestos.

En auto del 9 de junio de 2017, se ordenó dar trámite a la acción, disponiéndose la vinculación como litisconsorte necesaria por pasiva de la señora María Ubaldina Mesa Bedoya al habersele reconocido la sustitución de la pensión en disputa, mediante la Resolución 11424 de 2004.

Debidamente notificada de tal actuación, **Colpensiones** por conducto de apoderada allegó contestación, aceptando como ciertos la fecha de celebración del matrimonio católico, el reconocimiento de la pensión de vejez al señor Hernando Antonio, la fecha de fallecimiento del mismo, y el contenido de los actos administrativos que negaron la sustitución de la prestación a la demandante. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló **las excepciones** de inexistencia de la obligación de reconocer pensión de sobrevivientes e intereses moratorios, improcedencia de la indexación, buena fe, prescripción, imposibilidad de condena en costas, innominada o genérica y compensación.

María Ubaldina Mesa Bedoya, en su contestación acepta que el señor Hernando Antonio era pensionado; que contrajo matrimonio católico con la señora María Libia, la petición de pago de la pensión por parte de esta última, y las respuestas negativas brindadas a la misma. Mostró oposición a las pretensiones incoadas, formulando las excepciones que denominó: falta de los presupuestos procesales para el reconocimiento de la

pretensión de la pensión de sobrevivientes, falta de causa para pedir, mala fe y condición de debilidad manifiesta de la demandada.

La primera instancia culminó con **sentencia** del 12 de mayo de 2021 proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito, en la que declaró probada la excepción de fondo de *"INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA"* y en consecuencia, absolvió a las demandadas de las pretensiones impetradas por la señora María Libia Holguín de Arrubla, a quien condenó en costas en favor de COLPENSIONES, fijando como agencias en derecho el equivalente a 1 smmlv para el momento de liquidación de las costas. Sin costas ni a cargo ni en favor de la litisconsorte necesaria.

Argumentó el fallador que, aunque la demandante acreditó tener vigente la sociedad conyugal, y haber convivido con el causante por más de 5 años, no se apreciaba que perviviera el vínculo actuante entre la pareja, por lo cual, tal como lo tenía sentado la jurisprudencia especializada, entre otras en la sentencia SL1730 de 2020, no era viable reconocer la pensión por cuanto lo primordial era acreditar la continuidad de los lazos de apoyo, auxilio, ayuda y soporte mutuo lo que en el caso, como lo confesó la accionante ya no se presentaba desde que se dio la separación de hecho.

Recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la apoderada de la **demandante** solicita la revocatoria y con ello la concesión del derecho pretendido, para ello argumentó que su representada acreditó una convivencia mayor a 5 años con el fallecido, y que la misma fue reconocida por la codemandada señora Mesa, por lo que no se pueden imponerse requisitos diferentes a los legales, es decir, a los previstos en la ley 100 de 1993, con sus modificaciones, que consistían únicamente en que *si no existía convivencia*

simultánea y se mantenía vigente la unión conyugal pero con una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrían reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando hubiese sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le correspondería a la cónyuge con la cual existía la sociedad conyugal vigente, lo que en el caso está plenamente acreditado, siendo tema reiterado por la jurisprudencia especializada, mediante la cual se explica la viabilidad de la prestación para la cónyuge siempre y cuando acredite una convivencia real y efectiva durante un lapso de 5 años en cualquier tiempo, siendo el requisito suficiente para acceder a la pensión deprecada, sin que además pudiera exigirse o pretender que existiese un vínculo actuante cuando el causante ya tenía una nueva pareja.

Del término **para presentar alegaciones** la apoderada de Colpensiones, solicitó confirmar la decisión de primera instancia atendiendo a que con el debate probatorio, se logró evidenciar que la demandante, no dependía económicamente del causante, pues trabajaba desde el momento de su separación en el año 1981, por lo cual era independiente y no requirió de la ayuda del causante para cubrir sus necesidades básicas, resaltando que adquirió su status de pensionada desde el año 1997, no evidenciándose así una circunstancia de debilidad que deba ser protegida, pues con la muerte del pensionado, no se derivaron para la demandante consecuencias que pudieran afectar su estabilidad económica y su mínimo vital.

Agregando que, sumado a lo anterior, para el momento del fallecimiento del causante, entre este y la señora Maria Libia, a pesar de encontrarse vigente el vínculo no se prestaban ningún tipo de ayuda o socorro mutuo que permitiera concluir que continuaban interesados en un proyecto común, no acreditándose entonces un efectivo compromiso de ayuda como factor determinante para establecer el derecho a la sustitución

pensional, en casos de conflicto entre cónyuge supérstite y compañera (o) permanente.

Por su parte, el **apoderado judicial de la demandante** solicitó revocar la decisión inicial argumentando que el vínculo matrimonial entre su mandante y el causante nunca se disolvió, y que por razones ajenas a ella la convivencia no continuó, no por su libre determinación, sino porque fue abandonada con sus hijos por el causante, además del maltrato al que estaba sometida, configurándose así circunstancias de fuerza mayor, sin embargo, se mantuvo con pleno vigor los efectos jurídicos del vínculo matrimonial, que es precisamente lo que la norma protege, tal y como lo ha manifestado la corte suprema de justicia en sentencia como 40.995 de 31 de enero de 2012, 41.637 de 2012, 40.055 de 2011, sentencia 44.542 de 2013, donde se explicó además que la norma trae varios supuestos, uno de ellos, en cuanto a que la unión conyugal precedida de una separación de hecho otorga el derecho pensional a la cónyuge siempre que la convivencia hubiese durado por lo menos 5 años, reconociendo el lazo jurídico del vínculo matrimonial, lo que ocurrió en el caso al acreditarse una convivencia por 21 años.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Como hechos debidamente acreditados en los autos se tienen que: la señora María Libia Holguín Restrepo y Hernando Antonio Arrubla Montaña contrajeron matrimonio el 26 de febrero de 1961, sin que obre nota marginal alguna en relación con el vínculo (según registro civil de matrimonio); que procrearon 10 hijos (registros civiles de nacimientos); que mediante Resolución 3207 de 1998, el ISS hoy Colpensiones le reconoció al señor Hernando Antonio Arrubla, pensión de vejez a partir del 1 de marzo de

1998; que el pensionado **falleció el 20 de noviembre de 2003**; que el 27 del mismo mes y año la señora María Ubaldina Mesa Bedoya solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional por la muerte del señor Hernando en calidad de compañera permanente, petición que fue concedida mediante la Resolución 11424 de 2004; que el 8 de julio de 2016 la hoy demandante presentó ante Colpensiones reclamación de sustitución pensional en calidad de cónyuge del fallecido, la que fue negada a través del acto administrativo GNR 245323 del 19 de agosto de 2016, bajo el argumento de que el derecho fue reconocido en un 100% a la señora Mesa, decisión que fue posteriormente confirmada por las Resoluciones GNR 356753 del 25 de noviembre del mismo año y VPB 492 del 5 de enero de 2017.

Teniendo en cuenta la inconformidad de la recurrente, el **problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si según lo previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la sustitución pensional, la demandante en calidad de cónyuge con vínculo matrimonial vigente, pero separado de hecho, debe demostrar, además de la convivencia efectiva durante 5 años en cualquier tiempo, que los lazos afectivos permanecieron inalterados hasta el momento de deceso del pensionado, como lo consideró el juez de primera instancia.

Sobre el particular, es preciso señalar que el artículo 13 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 establece que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) (...)

b) (...)

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. **Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente."**

La jurisprudencia especializada ha señalado de manera reiterada que la demostración de los lazos familiares y afectivos, en el caso de la cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separado de hecho del causante, no es una exigencia prevista en el inciso 3.º del literal b), por cuanto el contenido de tal norma establece que, en ese evento, la esposa tiene derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido, así lo explicó en sentencia SL5169-2019 y lo reiteró en la SL359 del 3 de febrero del año en curso, en la cual señaló:

*"En efecto, esta Corporación tiene adoctrinado que «la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado (...) en un periodo de 5 años», puede ser acreditado «en cualquier tiempo». Ello, en aras de cumplir la finalidad **de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del de cujus, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social** (CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41673, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019, CSJ SL4047-2019, CSJ SL4771-2020, CSJ SL3850-2020 y CSJ 2746-2020).*

Por lo visto, es incorrecto sostener que la cónyuge separada de hecho no tiene la posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes pese a que su vínculo matrimonial está vigente.

Acerca de dicha tesis, en sentencia CSJ SL5169-2019, esta Sala explicó que la misma corresponde al verdadero alcance e intelección del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, porque aunado a lo referido anteriormente acerca de su finalidad, «su contenido encuadra en las realidades o situaciones sociales que regula dicho precepto, esto es, no invisibiliza las diferentes circunstancias que generalmente rodean la dejación de la vida en comunidad entre esposos».

En la misma providencia, la Corte señaló que lo anterior obedece a que: (i) comúnmente, la separación de hecho ocurre por problemas estructurales en las relaciones matrimoniales, que a la larga generan el distanciamiento de los consortes; (ii) tales situaciones son imprevisibles por el legislador; (iii) y, por

tanto, el rol del juez consiste en interpretar la norma conforme las particularidades de cada caso, es decir, darle el alcance que corresponda según cada situación que no pudo anticiparse en la ley. Conforme ello, anotó que incluso el artículo 176 del Código Civil, no establece dentro de las obligaciones a los cónyuges, las de mantener los lazos afectivos o familiares hasta el momento del fallecimiento de uno de ellos.

En ese orden de ideas, la ruptura de las relaciones afectivas con una persona con la que se convivió por virtud del matrimonio no es óbice para acceder a la pensión de sobreviviente, más si se tiene en cuenta, que la norma acusada no dispone tal exigencia.”

Así las cosas, es claro que en este evento, el juzgado de conocimiento limitó el alcance de la norma analizada al concluir que la demandante si bien tenía el vínculo matrimonial vigente y convivió con el causante por más de 20 años, no era procedente acceder a su pretensión por cuanto posterior a la separación de hecho no se continuó con un vínculo actuante, del cual se coligiera la permanencia de lazos familiares y apoyo mutuo, en razón a que tal requisito no lo contempla la disposición, pues el correcto alcance del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, corresponde a que el consorte con vínculo conyugal vigente, a pesar de haberse separado de hecho, puede solicitar válidamente una pensión de sobrevivientes siempre que haya convivido por lo menos 5 años en cualquier época con el causante afiliado o pensionado, tal como lo ha reiterado el órgano de cierre en pluralidad de providencias, entre otras, en sentencias CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41637, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019 y CSJ SL4047-2019.

En ese orden de ideas, a efectos de reconocer la sustitución pensional a la cónyuge con unión matrimonial vigente y separación de hecho, basta con que acredite el requisito de convivencia con el causante en cualquier época en los términos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

Luego, conforme al material probatorio y a lo informado en el hecho tercero del escrito de demanda por la señora María Libia, que fue

aceptado en la contestación presentada por María Ubaldina, no se discute que la accionante convivió 20 años, 10 meses y 5 días en cualquier tiempo con el de cujus¹, de modo que tiene derecho a la sustitución pensional en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

Así mismo es un hecho indiscutido que luego de la separación con la demandante, tal y como lo acepta ésta, Hernando Antonio Arrubla Montañó convivió en unión marital de hecho con María Ubaldina Mesa Bedoya hasta el fallecimiento y por un lapso de 21 años, 9 meses y 19 días². De ahí que la compañera también tenga derecho a la prestación debatida a la luz del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por cuanto del contenido del inciso 3° del literal b) de la disposición en cita, se entiende que, si respecto del pensionado concurre compañera o compañero permanente, con vínculo matrimonial vigente, la pensión se dividirá en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. Si sucede que no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la (el) compañera (o) puede reclamar una cuota parte de lo correspondiente en el literal a), en un porcentaje igual al tiempo convivido con el causante, siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años.

Así, conforme lo extraído del trámite procesal, según lo confesado en los interrogatorios por ambas declarantes, (pues los testigos traídos por la litisconsorte FABIO ALEXANDER ARRUBLA MESA y JESSICA NATALIA HENAO ARCILA, hijo y nuera de la señora María Ubaldina solo se refirieron a la condición económica de su familiar), la actora María Libia Holguín convivió como cónyuge por 20 años, 10 meses y 5 días, mientras que María Ubaldina Mesa hizo lo propio durante 21 años, 9 meses y 21 días, por lo que en proporción a dichos términos se distribuirá la pensión de sobrevivientes fijada por Colpensiones en una cuantía inicial **de \$774.128.00**, desde el 20 de noviembre de

¹ Desde el 26 de febrero de 1961 al 31 de diciembre de 1981.

² Entre el 1 de febrero de 1982 al 20 de noviembre de 2003.

2003, fecha del deceso del pensionado³. Entonces a la cónyuge le corresponde el **48,88%** equivalente a **\$378.394.00** y a la compañera un 51,12% que asciende a la suma de \$395.734,00.

Atendiendo a que la actora presentó reclamación administrativa **el 8 de julio de 2016** (archivo digital 3. Anexos Demanda fl. 29), fecha desde la cual pretende el pago de la prestación deprecada, tal como se invoca en el escrito introductor, y desde la que la entidad debió tomar las medidas tendientes a la protección de los recursos, ante los cambios jurisprudenciales que la habilitaban para obtener un porcentaje de la suma previamente reconocida a una de las beneficiarias, se le debe cancelar el monto que se detalla a continuación, por concepto de retroactivo:

RADICADO: 050013105-022-2017-00299-01				
disfrute de la prestacion Maria Libia 8 de julio de 2016				
AÑO	VALOR PENSION 100%	pension María Libia Holguín 48,88%	NUMERO MESES	TOTAL ADEUDADO A MARIA LIBIA
2016	\$ 1.367.845	\$ 668.603	6,7	\$ 4.479.641
2017	\$ 1.446.496	\$ 707.048	14	\$ 9.898.668
2018	\$ 1.505.658	\$ 735.966	14	\$ 10.303.524
2019	\$ 1.553.538	\$ 759.370	14	\$ 10.631.176
2020	\$ 1.612.572	\$ 788.226	14	\$ 11.035.161
2021	\$ 1.638.535	\$ 800.916	7	\$ 5.606.413
			TOTAL	\$ 51.954.583

A partir del mes de julio de 2021, se continuara pagando a la señora María Libia, una mesada equivalente a \$800.916,00, 14 al año, con los ajustes que a futuro decrete el Gobierno Nacional.

Frente a los **intereses moratorios**, si bien inicialmente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que estos operaban por la simple mora en el pago, a partir de la sentencia SL 704 de 2013, se moderó esta posición para advertir que cuando la entidad actúa acatando preceptos legales sin el alcance que pueda darles la

³ Según lo dispuso en Resolución 11424 del 21 de julio de 2004.

jurisprudencia en un evento determinado, no hay lugar a los referidos intereses (tesis reiterada entre otras en las providencias, SL1874-2021, SL960-2021, SL611-2021, SL454-2021 y SL1476), siendo esta la situación que se presenta en este evento toda vez que la jurisprudencia especializada, luego de diversos análisis, como ya se dijo, adoctrino que *«la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado (...) en un periodo de 5 años»*, puede ser acreditado *«en cualquier tiempo»*, con la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del fallecido, en virtud del principio de solidaridad, por lo cual, en este asunto, conforme a lo anterior y a la concurrencia de beneficiarias, que en su momento ocasionó que la administradora no reconociera la pensión de forma automática a la hoy demandante, no es dable imponer tal condena; procediendo en forma subsidiaria **la indexación**, mecanismo de actualización que *se erige como una garantía constitucional (art. 53 CP), que se materializa en el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones, en relación con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE (CSJ SL9518-2015, CSJ SL3199-2017 y CSJ SL3821-2020)*, y que aplica incluso en forma oficiosa, para que, con fundamento en los principios de equidad e integralidad del pago, se ajusten debidamente las condenas a su valor real y, de esta manera, se logre que los créditos representados en dinero no pierdan su poder adquisitivo por el fenómeno inflacionario, procediendo entonces tal indexación sobre cada una de las mesadas **reconocidas, atendiendo su causación periódica.**

Colpensiones queda autorizada para deducir del retroactivo pensional, los aportes al sistema de seguridad social en salud a cargo de la demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 inciso 2 de la Ley 100/93, en concordancia con el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, jurisprudencia constitucional y especializada.

En síntesis, se revocará el fallo de primer grado para, en su lugar, condenar a Colpensiones a reconocer a la actora la sustitución pensional con efectividad a partir del 8 de julio de 2016, en proporción del 48.88,% de la prestación y a cancelar las mesadas adeudadas de manera indexada.

A este punto no sobra advertir que Colpensiones puede ejercer las acciones legales correspondientes para recobrar el mayor valor por mesadas pensionales pagado en su momento a la señora María Ubaldina Mesa Bedoya.

Las costas en ambas instancias corren a cargo de Colpensiones, artículo 365-4 del C. G. del P., en esta se fijan agencias en derecho en la suma de \$908.526,00.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA** la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín el 12 de mayo del año en curso y, en su lugar, dispone:

PRIMERO: DECLARAR que **MARÍA LIBIA HOLGUÍN DE ARRUBLA** en calidad cónyuge supérstite, tiene derecho al 48,88% de la pensión causada por Hernando Antonio Arrubla Montaña y **MARIA UBALDINA MESA BEDOYA** al restante 51,12%.

SEGUNDO: CONDENAR a la **Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-** a reconocer a **MARÍA LIBIA HOLGUÍN DE ARRUBLA** la pensión de sobrevivientes causada a la muerte de Hernando Antonio Arrubla Montaña, en un 48,88% de la prestación a partir del 1 de julio de 2021, el valor a su favor asciende a \$800.916,00,

14 mesadas anuales, con los ajustes que a futuro decrete el Gobierno Nacional.

Asimismo, se condena a Colpensiones a reconocer a la actora la suma de **\$51.954.583,00. por concepto de retroactivo causado desde el 8 de julio de 2016 al 30 de junio de 2021.** Valor que la entidad deberá indexar, debiendo calcular la actualización sobre cada una de las mesadas pensionales causadas **a partir de julio de 2016** y hasta que se realice el pago efectivo de la obligación.

De la anterior suma, Colpensiones deberá efectuar los descuentos para cotización en salud, a partir de la fecha de reconocimiento de la pensión, con destino a la empresa promotora de salud a la cual se encuentra vinculada la demandante, así como de las mesadas pensionales posteriores, en la medida en que se causen.

Las costas en ambas instancias corren a cargo de Colpensiones, artículo 365-4 del C. G. del P., en esta se fijan agencias en derecho en la suma de \$908.526,00.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el Decreto 806 de 2020.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

Rad.: 05001 3105 **022 2017 00299** 01
Dte.: María Libia Holguín de Arrubla
Ddo.: Colpensiones y María Ubaldina Mesa Bedoya

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 114** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, **1 de julio de 2021**

Secretario